

La pelea de dos pueblos por no abandonar sus tierras

Juan José Toro Sánchez

Director: José Navia Lame

Periodismo y Opinión Pública

Escuela de Ciencias Humanas

Universidad del Rosario

Bogotá

2016

Objetivo

Desarrollar, por medio de crónicas escritas, dos perspectivas de desplazamiento en Colombia a través de dos casos paradigmáticos: el de Marmato, Caldas, como ejemplo de desplazamiento por motivos económicos, y el de La Palma, Cundinamarca, como ejemplo de desplazamiento por motivos de conflicto armado.

Justificación

Colombia ocupa el primer lugar en el ranking mundial de número de desplazados. Son más de 6 millones. Esa cifra, más allá de ser vergonzosa y alarmante, se traduce en 6 millones de historias que quedan en el aire. El volumen que se cubre de ellas en los medios de comunicación es mínimo e insuficiente. Sin embargo, esa es una tarea pendiente: en muchos casos, las experiencias particulares de los protagonistas aportan más a la comprensión del contexto en que fueron desplazados que las cifras y los datos fríos. Por eso, en primer lugar, se justifica narrar historias de desplazamiento.

Ahora, ¿por qué dos? Una de las hipótesis que planteé en mi anteproyecto es que, desde la segunda mitad del siglo pasado, han existido en el país al menos dos formas de desplazamiento: uno, que obedece a la violencia más dura, y otro, que obedece a motivos económicos. El primero es el que robustece más la cifra de desplazados: casi todos ellos huyeron de la guerrilla, los paramilitares o el Ejército. El segundo, en cambio, es más discreto: viene de la mano con sustentos legales, no se vale de la violencia directa, es apoyado por instituciones del Estado. Contar las dos caras de la moneda permite ver en qué difieren ambos tipos, en qué se solapan y cómo, si es el caso, se complementan.

Y, finalmente, ¿por qué Marmato y La Palma? Marmato es un pueblo caldense de 8 mil habitantes que está construido en una montaña con millones de onzas de oro. Los marmateños han sacado oro desde hace más de 500 años. También, desde hace décadas, han llegado multinacionales a comprar títulos de minas y a explotar. Recientemente han mostrado su intención de explotar a cielo abierto, lo que

obligaría a trasladar el pueblo. Con ese fin se urbanizó una vereda a varios kilómetros de Marmato: para empezar a hacer el traslado. Los marmateños, sin embargo, han dado toda la pelea y aseguran que de su tierra no piensan moverse, a pesar de que por ley el 88% de las minas ya le pertenecen a Gran Colombia Gold.

La Palma, por otro lado, es un municipio de Cundinamarca que, desde finales de los noventa, vio su población reducida a la mitad. Durante los setenta y los ochenta era una suerte de fortín del frente 22 de las Farc, en los noventa llegaron los paramilitares del Bloque Cundinamarca de las Autodefensas y a principios de este siglo apareció, con más fuerza que antes, un Ejército que, en lugar de resolverla, hizo más compleja la disputa entre los dos enemigos. La guerra entre los tres actores obligó a desplazarse a más de 10 mil palmeros en menos de una década. Tras la desmovilización, en 2004, del Bloque Cundinamarca, la violencia menguó y algunos han podido volver. Sin embargo, el recuerdo del horror sigue presente y las garantías de retorno del Estado no han sido suficientes.

Las dos historias funcionan como casos ejemplares para hablar de los dos tipos de desplazamiento. Además, a partir de la reportería en terreno, muestran los matices que se pierden cuando se habla únicamente de víctimas y victimarios, de buenos y malos, de grandes empresas y pequeños campesinos.

Metodología

Este proyecto contempla el uso de técnicas e instrumentos de corte cualitativo. Las herramientas principales serán la entrevista a profundidad y la historia de vida¹. Las dos técnicas son esenciales en tanto las historias de desplazamiento tienen como elemento central al ser humano. El desplazamiento, aunque pueda ser conceptualizado e investigado como fenómeno específico, se compone de historias de personas: personas que en un momento estaban en una situación y luego la vida les cambió. A través de herramientas como la historia de vida se pretende buscar

¹ Al final de los textos, a manera de anexo y por sugerencia del jurado Germán Ortiz Leiva, se presenta un listado con lugares y fechas de las entrevistas realizadas en campo.

esos matices y ahondar en los momentos de la vida de cada personaje que ayuden a presentar las causas y consecuencias del desplazamiento económico y del violento. Además, la entrevista a profundidad puede funcionar con los que serían personajes secundarios de las crónicas. No interesa precisamente todo por lo que han pasado, pero sí hace falta que cuenten detalles específicos que ayudarán a dibujar el contexto dentro del que suceden las historias que se contarán.

Referencias

Molano, A. (2001). Desterrados: Crónicas del desarraigo (Vol. 650). Bogotá: El Ancora.

Molano, A. (2011). El espejismo de Marmato. El espectador. Revisado el 28 de abril de 2015 en <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/elespejismode-marmatoarticulo302997>

Roldán, N. (2014). Marmato, el drama de un pueblo que vive sobre una montaña de oro. Cromos. Revisado el 28 de abril de 2015 en <http://www.cromos.com.co/actualidadcronicas/marmatoeldramadeunpuebloque-vivesobreunamontanadeoro16018>

Villoro, J. (2006) La crónica, el ornotorrico de la prosa. La Nación. Revisado el 28 de abril de 2015 en <http://www.lanacion.com.ar/773985lacronicaornitorrincodela-prosa>

La pelea de dos pueblos por no abandonar sus tierras

El desplazamiento es uno de los mecanismos por los que durante décadas se ha privado a los campesinos de vivir en sus tierras. Aquí, dos crónicas que dan una mirada a cómo, con burocracia o con violencia, han aparecido obstáculos para que poblaciones campesinas ocupen su lugar.

Colombia lleva varios años peleando la punta del penoso ranking de países con más desplazados en el mundo. El número asciende a más de 6 millones. La gran mayoría de la culpa recae sobre el conflicto armado de los últimos 52 años, aunque quizás habría que ir más atrás para comprender cómo se reparte la tierra en el país. Los otros, los que no huyeron por la guerra, lo han hecho por otras presiones. Económicas y legales, sobre todo. “Perder la tierra es perderlo todo” es el nombre que le he dado a este intento por descifrar dos casos particulares dentro de esas dos caras de la moneda: la de la sangre y la del dinero.

Una aproximación al desplazamiento no es nueva, por supuesto. Estos textos no aportan novedad sino detalle: aunque el tema del desplazamiento ya parece manido, no hay que perder de vista la importancia de lo particular. En “Una nación desplazada”, el gran informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre desplazamiento, dice que el 99% de los municipios colombianos lo han sufrido. Es decir, más de mil. De algunos de ellos ya se han contado las historias. Hay casos emblemáticos como San Carlos, en Antioquia, Tibú, en Norte de Santander, o incluso Buenaventura, un referente clave para entender el desplazamiento intraurbano. Pero aún faltan cientos de pueblos por narrar. Y dentro de los que ya han sido narrados quedan cientos de historias y puntos de vista diferentes por contar. Por eso es que una reportería como está no sobra. Al contrario: falta.

Aunque traté de tomar municipios que sirvieran de referente (por lo importantes, por la cantidad de desplazados, por reunir grandes poderes opuestos), casos como los que contaré se pueden encontrar por puñados en Colombia. Aquí presento dos

miradas que bien pueden bastar por sí mismas o analizarse de manera análoga en otros casos.

“El oro es magnético en Marmato” cuenta cómo, durante los últimos diez años, grandes compañías multinacionales han hecho todo lo posible para convertir a Marmato, un municipio caldense lleno de oro, en una grande y rentable mina a cielo abierto, a pesar de que sus poco más de 8 mil pobladores se han opuesto férreamente.

“Manual para reducir un pueblo a la mitad” explica la otra cara del desplazamiento: la guerrilla de las Farc y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, ávidos ambos de controlar el norte de Cundinamarca, convirtieron las veredas de La Palma en trincheras y se ensañaron contra sus habitantes, acusándolos de pertenecer al bando contrario, fuera el que fuera. Así sacaron corriendo, a partir de 2001, a más de la mitad del municipio, que aún no encuentra garantías para volver².

El oro es magnético en Marmato

*Mi pueblo se está acabando
nostalgia la que nos da
los unos van para El Llano
los otros a otro lugar.*

Verso de Luis Gonzaga, cantautor marmateño.

² Esta introducción fue hecha y modificada a raíz de la sugerencia del jurado Germán Ortiz Leiva, quien recomendó hacer explícita la importancia de la reportería y dejar claro que los dos casos de estudio que escogió se pueden replicar en otros municipios del país.

Sobre Marmato cuelga un sol que abrasa sin clemencia. La temperatura roza los treinta grados. Varios gallinazos se posan sobre un cable del alumbrado público, en la mitad de la carretera que parte la montaña en dos. Da la sensación de que vigilan algo pero no se ve ningún animal descomponiéndose. Por momentos sobrevuelan el territorio. Pasan lejos de las cabezas cubiertas por cascos amarillos de los trabajadores que, como hormigas, entran y salen de pequeñas bocas que conducen al interior de la tierra.

La carretera hacia el pueblo arranca en la mitad de la vía que conduce de Medellín a Manizales. A pocos minutos de La Pintada, el gran balneario paisa, comienza una loma pavimentada que serpentea hasta llegar a El Llano. A la izquierda de quien sube aparece una pequeña ciudadela de casas nuevas, de aspecto prefabricado, y dos construcciones grandes, si se quiere desproporcionadas: un colegio y un hospital. Un mototaxista que recorre esa ruta de arriba abajo se detiene y me pregunta:

—¿Va para Marmato?

—¿No es acá?

—Marmato es arriba. Este es El Llano, una vereda de Marmato.



Marmato se encuentra sobre una montaña, subiendo por la carretera que lleva de Medellín a Manizales.

Cinco kilómetros después, por un destapado que revuelve las tripas, ese mismo mototaxi me lleva hacia el verdadero Marmato: la mítica montaña que, según dicen las cifras del Estado, guarda en sus adentros casi 10 millones de onzas de oro y casi 60 millones de onzas de plata. El Llano, me explica, es una vereda casi nueva que construyeron más abajo hace pocos años para reubicar el pueblo antiguo. La versión oficial es que, debido a un deslizamiento de la montaña en la parte alta, el Marmato antiguo está en peligro y hay que trasladarlo. El rumor, sin embargo, es otro: una gran multinacional minera quiere extraer oro a cielo abierto y para eso tienen que desplazar a los casi 2 mil habitantes del casco urbano.

La historia de Marmato es larga y truculenta, pero todos los detalles caben dentro de una gran pelea: la de gigantes compañías extranjeras, que quieren sacar el oro, contra los mineros de toda la vida, que esperan poder continuar extrayendo día a día lo suficiente para comer, pagar servicios y tomar cerveza en las tardes. Ese

pulso ha pasado por negociaciones informales, juzgados y agarrones a puño y piedra. La disputa se transforma con los años pero difícilmente avanza hacia un consenso. Parece que los dos bandos hablaran idiomas distintos.

Cuando llego por fin al pueblo me doy cuenta de que el verdadero Marmato se divide nuevamente en dos: el centro histórico y la parte baja. El centro queda aún más arriba, por un camino empedrado que se empina a más de cincuenta grados. Allá ya no llegan los jeep que transportan pasajeros desde El Llano. Con dificultad suben y bajan burros cargados de materiales para trabajar en las minas y los molinos, que es donde se procesa el oro. El lugar, que los habitantes del pueblo siguen llamando histórico, está prácticamente en ruinas.

La antigua alcaldía, el antiguo hospital, el antiguo colegio, la antigua biblioteca, todos son escombros. En pie resisten los cimientos de construcciones de estilo colonial que los marmateños recuerdan con nostalgia. “Ese era el hospital —me dice una señora robusta y morena, señalando una casa vieja cuyas puertas y ventanas están selladas con pedazos de madera—, pero ahora no tenemos ni dónde enfermarnos”. Me explica que, después de la avalancha, que desprendió un pedazo del cerro El Burro en 2006 y afectó 92 casas, la Alcaldía evaluó el terreno como zona de riesgo y decidió que había que trasladarse, primero hacia la parte baja de Marmato y luego hacia El Llano. Corpocaldas, en cambio, dijo que el riesgo era mitigable.

En la parte baja de Marmato, junto a una plaza con su iglesia, un Cristo, una cafetería y varios cervecaderos, se mueve el comercio del oro. En las pocas calles que se desprenden de la plaza hay más compraventas de oro que lugares dónde comer. En la cafetería, la única del pueblo, se reúne todos los días un grupo de marmateños célebres: Yamil Amar, Mario Tangarife y Ulises Lemus. Los tres pertenecen a la Asociación de Mineros Trabajadores de Marmato (Asomitrama), que desde hace años ha sido la primera línea de defensa de los intereses de los mineros tradicionales que se oponen a la explotación a gran escala de su tierra.

Yamil Amar, un anciano de ojos rasgados y ascendencia israelí, fue alcalde del municipio y lo conoce mejor que nadie. Todos pasan a saludarlo y a tomar tinto con él para contarle sus problemas. Amar, que asesora con la serenidad de un sabio, me explica de memoria cuál es el lío por la posesión de esas tierras. “El suelo y el subsuelo —dice, con voz pausada— son del Estado. Históricamente ellos les alquilaban eso a los mineros que querían explotar. Siempre bastó con presentar la cédula y hacer un hueco en la tierra. Pero el Ministerio de Minas le empezó a entregar títulos a varias compañías: primero a Ecominas, que se transformó en Mineralco y luego en Minercol. Luego fueron Mineros de Caldas, que de caldenses no tienen sino el nombre porque son canadienses, y esos le vendieron a Colombian Goldfields, que luego negoció con Medoro, que luego se fusionó con Gran Colombia Gold. Ellos siempre cambian de razón social para despistar, pero detrás de todo están los mismos extranjeros persiguiendo nuestro oro”.

La historia de la titulación de las minas marmateñas es de vieja data. Fernando Martínez, un ingeniero químico que ha trabajado para esas compañías y también ha representado a los mineros, cuenta que el embrollo fue causado por el desconocimiento de las leyes que los cubren. Los títulos de las minas, desde la colonia hasta la primera mitad del siglo pasado, se habían entregado más o menos a dedo. Solo había que apropiarse de un pedazo de la montaña y mostrar intención de explotarla. Existía una suerte de armonía entre los mineros porque la montaña era lo suficientemente grande para todos.

Durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, en 1946, cambiaron las cosas. La carretera que llega desde El Llano, que para entonces no existía, se convirtió en la línea de la discordia. La ley 66, firmada ese año, dividió la montaña en dos: de la carretera hacia arriba sería la zona destinada a la pequeña minería, y de la carretera para abajo se haría minería mediana. En 1954, sin embargo, se modificó de nuevo esa ley. Siendo dictador Gustavo Rojas Pinilla, se expidió el decreto legislativo 2223, que reorganizaba la montaña: ahora la zona alta era, a la vez, para pequeña y mediana minería, y la zona baja era para la minería empresarial.



Los mineros artesanales se tumbaron las puertas de las minas tituladas a Gran Colombia Gold porque exigían derecho a trabajar en su tierra.

El decreto de Rojas Pinilla estableció que la minería en Marmato se haría por cotas. Es decir, la referencia de las minas sería su altura sobre el nivel del mar. En el pueblo dicen que esa legislación no la tienen sino ellos y les ha causado muchos problemas. En 1994 salió una ley, la 141, que en el artículo 58 decía que para final de ese año se titularía de manera gratuita a los pequeños mineros que demostraran haber explotado constantemente de manera informal. Como el sistema de cotas permitía que hubiera superposiciones entre las minas, un decreto reglamentario de esa ley, el 2636, pidió que las autoridades competentes supervisaran las conciliaciones entre los mineros para hacer los títulos. “La conciliación se hizo y todos felices”, me explicó el ingeniero Martínez. Esa reglamentación, sin embargo, se ha interpretado de distintas maneras por parte de los funcionarios. Por un lado, la competencia para conocer los asuntos de minas en el país ha cambiado a través

de los años. Por otro lado, la absorción y compra de las compañías interesadas en disputar los títulos ha generado confusión por parte de los nuevos funcionarios que asumen. El proceso de negociación entre los mineros tradicionales y las grandes compañías no ha sido limpio.

Cuenta Álvaro Gartner, en el libro *Los misteres de las minas*, que Simón Bolívar empeñó minas de Marmato a los ingleses para financiar su campaña libertadora por todo el continente. Esa historia es bien conocida por la gente del pueblo. Ulises Lemus, un hombre de aspecto vikingo que se opone casi con odio a la minería de las multinacionales, utiliza el recuerdo de lo que hizo Bolívar para explicar con una analogía lo que ha pasado en los últimos años:

—Esta montaña llevamos casi 500 años explotándola. Nos ha dado para vivir y para construir todo lo que usted puede ver. Pero aquí han venido toda clase de gallinazos, hermano —dice Ulises, y señala el cielo extrañamente plagado de esos animales—, unos son políticos y otros vienen de la mano de ellos. Como cuando Bolívar se apropió de estas tierras para pagar sus gastos. Así ha sido desde hace un tiempo para acá. Los políticos negocian con las multinacionales sin consultarnos a nosotros. Les dan todos los títulos que quieren.

Aunque, desde que se le entregó la zona baja de la montaña a la minería empresarial, ya habían empezado a coquetear intereses extranjeros, fue a principios de este siglo que la disputa estalló. Yamil Amar y Ulises Lemus sospechan que las compañías que habían explotado desde la segunda mitad del siglo pasado eran canadienses. Que los títulos que iban comprando Mineros de Caldas, Mineros de Antioquia y Mineros Nacionales no eran más que la base de lo que pasaría cuando llegaran con sus nombres en inglés. Esa hipótesis está respaldada en sus sospechas, en su conocimiento del pueblo: cuando les pregunto si es posible probar que los canadienses llevan más de cincuenta años metidos en Marmato me responden que “usted tendría que haber vivido aquí todo ese tiempo para entender que no son disparates nuestros”.

Más allá de esa sospecha, lo que sí se puede probar es que, en casi una década, tres compañías canadienses se quedaron con el 88% de las minas, casi nueve de cada diez, tanto de la parte alta como de la baja. Hacia 2004, Mineros de Caldas vendió lo que tenía a Colombian Goldfields. En 2006 ellos le vendieron a Medoro. Empezando esta década, en 2011, Medoro fue absorbida por Gran Colombia Gold. Entre 2004 y 2009, Ingeominas, entonces encargada de administrar la minería del país, negoció más títulos en Marmato que durante la década y media anterior.

Marmato, el pueblo antiguo, está ubicado en el cerro El Burro. Las minas del resto del municipio están en los cerros Cien Pesos y Echandía, que aparecen si se continúa por la carretera que separa la zona alta de la baja. En toda esa montaña pelada y llena de huecos, que contrasta con el verde del paisaje cafetero que la rodea, hay 551 bocaminas repartidas en 121 títulos mineros. 106 ya son de la compañía canadiense. Eso equivale al 88%. Desde hace un par de años solo les faltan 15 títulos para ostentar todo el poder de la montaña. Ese poder les permitiría avanzar con la intención de explotar a cielo abierto. Un empleado de Mineros Nacionales, una de las empresas que explota las minas de propiedad de Gran Colombia Gold, me explica de qué se trata el proyecto:

—La idea de esta gente es mover decenas de miles de toneladas de material en bruto. Mucha más cantidad y mucho más rápido de lo que pueden mover ahora. Para eso tienen que cavar un hueco como de 800 metros. Abrirle un volcán a la montaña.



Los guacheros no cuentan con seguridad social y utilizan explosivos caseros y peligrosos.

“Las minas artesanales seguirán funcionando durante un máximo de dos años, momento en el que la compañía prevé iniciar la minería a gran escala en el proyecto Marmato”, explicó en 2012 un funcionario de la compañía a la revista Dinero.

Esa idea viene desde 2004, cuando llegó la primera delegación canadiense. La inmediata reacción del pueblo fue de rechazo. Mauricio Castañeda, un minero acuerpado y hablador, recuerda una anécdota mientras descansa bajo el sol de mediodía en la entrada de una mina llamada Villonza:

—En esta mina trabajo yo hace años. Puede ser una de las más grandes de todo el pueblo. Estas minas las había dejado botadas una compañía alguna vez. Como nosotros no hemos podido legalizarnos, pero esto es lo único que sabemos hacer y

lo que hemos hecho siempre, decidimos meternos a seguir explotándola. Lo hacemos de manera artesanal. Por eso nos llamamos guacheros.

Guachero, me explica Mauricio, es el nombre que les pusieron a los mineros ilegales. En el pueblo se cuentan por miles. No usan la protección adecuada, trabajan a la hora que quieren, no tienen prestaciones sociales, ganan lo que sacan en un día y ese mismo día se lo gastan. Ellos son los que están en la mira del Gobierno y las multinacionales. Dicen que les pusieron guacheros por los guácharos, unos pájaros ciegos que viven en cuevas y le temen a la luz.

Mauricio continúa su relato:

—Un día, por allá en 2004 o 2005, estábamos acá trabajando y vinieron unos señores de la nada. Llegaron hasta la boca de la mina para hablar con nosotros. Nos dijeron que esos títulos a los que nosotros le estábamos sacando oro eran de una multinacional y lo que nosotros hacíamos ahí era ilegal.

Esa delegación de la que habla estaba conformada por gente de Colombian Goldfields, Ingeominas y la alcaldía municipal. La sensación que dan los testimonios de la gente sobre esa llegada es que algo se negoció bajo cuerda. Fueron a avisarles, no a preguntarles. Óscar, el empleado de Mineros Nacionales que me había explicado el proyecto a cielo abierto, se pregunta sin embargo por qué tendrían que ir a consultarle a unos mineros ilegales para explotar unas minas que ya tenían tituladas legalmente. Una parte de la respuesta se puede explicar por la ascendencia de la población marmateña: seis de cada diez son negros, dos más son indígenas y el resto son mestizos. Esas cifras indican que, en lo que respecta al 80% de la población, debería haber procesos de consulta previa: el derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas, en aras de preservar su cultura y su economía, a ser consultadas cuando se vayan a hacer proyectos en sus territorios.

La otra mitad de la respuesta, me explica Nelson, otro guachero de la mina Villonza, se entiende por sentido común: uno no puede llegar a un pueblo y

pretender cambiarle 500 años de historia sin al menos socializarlo primero. Para él, si era inevitable que los extranjeros se apoderaran de las minas y le sacaran cientos de millones de dólares a la montaña, lo mínimo era que ofrecieran al pueblo garantías en retribución.

Eso no tardaron mucho en entenderlo los empresarios. Cuando Medoro se quedó con los títulos de Colombian Goldfields, en 2006, le dio un revolcón al pueblo. En un documental sobre Marmato, donde aparecen grabaciones de esa época, habla un ingeniero canadiense que representaba a Medoro: “vamos a tomar muestras de la ladera para llevarlas a que las analicen y básicamente mirar cómo tirar abajo esta montaña”. Esa parte del discurso de la multinacional contrastaba con un video publicitario que lanzaron entonces. La pieza pretendía mostrar a los marmateños cómo quedaría su pueblo tras la extracción a gran escala. Mostraban cómo iban a intervenir la montaña con un hueco de 800 metros, casi cuatro veces la altura de la torre Colpatria en Bogotá. Decían que sería un proyecto sostenible y altamente benéfico para la población, y que al final de la explotación se recuperaría el espacio cavado en la montaña. En el video, en efecto, aparece un lago gigante en el lugar del pozo.

“Es de suma importancia que la comunidad comience a entender que la minería responsable ambiental y socialmente es posible y que bajo nuestro liderazgo convertiremos a Marmato en un polo de desarrollo para la región y el país en general. Explicar que un proyecto productivo es viable social y económicamente es uno de nuestros objetivos, porque ese es parte del modelo productivo que queremos implementar con el apoyo de la comunidad para beneficio de Marmato y sus habitantes”, dijo Juan Manuel Peláez, el entonces presidente de Medoro, a través de un comunicado en 2010.

A Gonzalo Castro le brillan los ojos cuando le hablan de las multinacionales. Es un marmateño que desde pequeño soñaba con no trabajarle a nadie, con tener su propia mina. A sus sesenta años lo logró. Es dueño de un socavón y genera empleo. Pero dice que por encima del arraigo a su tierra prefiere la plata. “La plata mueve

todo. O casi todo —duda por un momento—, porque hay cosas que no las compra la plata. Pero sin ella uno no puede hacer nada”. Dice que es maravilloso que compañías extranjeras lleguen al pueblo y paguen miles de dólares por una mina. Gonzalo cree que las minas son las pequeñas empresas de los marmateños, y agrega que en todo el mundo los empresarios venden al mejor postor. “¿Por qué no acá? —se pregunta—: es bueno que nos traigan dólares y generen empleo”.

Cuando empezaron a llegar las multinacionales muchos pensaron así. Bien vendida, me explica La Viuda, como conocen en el pueblo a la dueña de una compraventa de oro, una castellana vale más o menos \$1.500.000. Las castellanas son una forma antigua de pesar el oro: equivalen a 4,6 gramos. Un tomín es más o menos medio gramo y un real es medio tomín. Así hablan en Marmato, donde nadie usa el sistema métrico. En un día normal, un guachero puede alcanzar a sacar un tomín de oro. Pero, como tiene que pagar explosivos, transporte y el uso del molino que lo procesa, al final de la venta le quedan menos de 50 mil pesos. El propietario de una mina, dependiendo de la cantidad de mineros que tenga jornaleando, puede hacer unos 200 o 300 mil pesos diarios. El propietario de un molino, algo cercano a 100 mil. Esas cifras, a ojo, son de Wilson Castro, el personero de Marmato, que tras decírmelas agrega: “este es un pueblo rico bajo tierra, pero los recursos se han ido sacando poco a poco. A la gente le va bien para el día a día, para el mes a mes, pero no es costumbre ahorrar ni invertir, porque aquí nadie está habituado a ver decenas o cientos de millones de pesos juntos. Aquí lo que se saca se gasta”.

El gran ejemplo de lo que fue esa época donde las compañías canadienses compraron casi todos los títulos de las minas, me dice el Personero, lo tiene la familia Gallego. Me invita a buscar a Alberto Gallego, un viejo que se la pasa desubicado deambulando las calles del centro histórico, o a José, hijo del difunto Alfredo Gallego. Decidí abordar a Alberto en el café. Estaba solo y, como lo había visto los otros días, siempre bien vestido y peinado. Después de una breve charla sobre asuntos varios, traté de hablarle de minería. De tajo me bajó de la nube:

—A mí no me gusta hablar de ese tema, joven. Lo único que le puedo decir es que uno se deja embelesar muy fácil por la plata y esas compañías lo saben. Pero hable con José, mi sobrino. A él lo encuentra bajando por el empedrado en la segunda casa de la derecha.

José es un tipo alto, moreno y acuerpado, de unos cuarenta años. Vive en una casa que lo excede. Recién separado, se quedó solo con su perro en la gran casa familiar. La misma que habitó durante toda la vida don Alfredo, su padre. Después de toda una tarde de charla, la historia de los Gallego es más o menos la siguiente:

Alfredo y Alberto, los dos hermanos, habían trabajado el oro durante toda su vida. Tenían visión para hacer crecer el negocio y, según José, tenían suerte para encontrar vetas de oro donde nadie más las veía. Una veta es una mancha en la roca que indica dónde hay oro. Cuando encuentran una, la llenan de explosivos, le prenden la mecha y cuando estalla sacan en una carreta, por un pequeño riel, todas las rocas que se desprendieron. Esas rocas las procesan en los molinos y de ahí extraen el oro. Los dos hermanos tenían seis minas. Empleaban decenas de trabajadores y el negocio familiar era próspero.

“Pero hubo una época —cuenta José— en la que el oro empezó a escasear. Como en 2005, creo yo. Nadie encontraba vetas. Mi papá, que siempre había sido tranquilo, que siempre decía que el oro llegaba cuando uno menos lo esperaba, empezó a desesperarse. Pasaron semanas y hasta meses donde la producción no le daba ni para pagar los trabajadores. Él tenía unos ahorros y se los tuvo que empezar a gastar”.

Fernando Martínez, el ingeniero, me había hablado de una teoría suya días atrás. Él cree que siempre que baja el precio del oro o cuando no aparecen vetas —en suma, cuando el negocio no es rentable— empiezan a llegar de nuevo las grandes compañías para ofrecer soluciones a los marmateños. La época de la que habla José, que terminó de estallar hacia 2006, no fue la excepción.

Después de rayar papeles con cuentas y de hacer todo lo posible para amortiguar la caída de la producción, Alfredo y Alberto se enfrentaron a una situación que empezó a parecer inevitable para varios propietarios de títulos: la multinacional, por ese entonces Medoro, estaba dispuesta a pagarles por las minas, y venderles era una forma segura de salir del problema. O eso parecía.

Por las seis minas que tenían, la compañía canadiense Colombia Goldfields les pagó a los hermanos casi 300 millones de pesos. “En Marmato —insiste José— eso era una cantidad de plata casi incontable”.



Aunque, tras cerrar las minas, Gran Colombia Gold también destruyó algunos molinos, el comercio del oro no para en Marmato.

Un día, José viajaba en un bus hacia Manizales. En una silla detrás de él iba un señor a quien reconocía. El señor no lo vio o no se percató de quién era. “Hermano, es que don Alfredo fue muy güevón —le dijo el hombre a su compañero de viaje—. Él vendió la 5.200 por 50 millones de pesos nada más. A esa mina dicen que le han

sacado como dos mil millones desde esa época”. “5.200” era el nombre de una de las mejores minas de los hermanos Gallego.

A José, en ese momento, la cifra sobre lo que había dejado perder su padre le pareció ridícula, casi imposible, pero después de eso empezó a preguntar más y más a quienes realmente sabían del tema y pudo constatar que los 300 millones que recibieron Alberto y Alfredo por sus seis minas no representaban ni remotamente el valor real del oro que de allí se podía sacar.

Como la historia de esa familia hay varias en el pueblo. Colombia Goldfields les compró a precios que a ellos les parecieron razonables, pero pasado un tiempo se dieron cuenta de que pudieron haber sacado mucho más. Muchos, incluso, se arrepienten de haber vendido: sienten, ahora, que no hay suma de dinero que compre el legado de un pueblo entero. “Eso fue lo que nos compraron”, concluye José. A ese paso, lenta y quirúrgicamente, la multinacional tenía en 2010 el 90% de las minas que toda la vida habían explotado los marmateños. Las de la parte alta y también las de la parte baja de la montaña.

Yamil Amar recuerda que, por esa época, asistió a una reunión de la compañía. Lo invitaron casi por casualidad, por haber pertenecido a la clase política del pueblo. En esa reunión escuchó la sentencia que lo aterró y contra la que lucha desde entonces: “ellos empezaron a hablar de desplazar el pueblo, todo el pueblo, y decían que era para desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto”.

La operación iba más adelante de lo que Yamil creía. La compañía, además de las minas, había empezado a comprar los molinos donde se procesa el oro. Y también los locales comerciales. Y también las casas de la parte antigua de Marmato. Había nueve comercios y Medoro, que ya empezaba a ser absorbido por Gran Colombia Gold, compró cuatro. Los marmateños recuerdan esa época como “cuando compraron El Molino”. El Molino era su taberna predilecta. La compraron, la destruyeron y no construyeron nada más.

La taberna El Molino, sin embargo, no fue el único molino destruido. Mario Tangarife, de Asomitrama, extiende un panfleto amarillento sobre la mesa de su oficina. En él, la asociación denuncia que desde que Colombia Goldfields empezó a comprar minas y molinos no los ha trabajado. “Cerraron las minas y tiraron abajo los molinos”, me dice Mario, un hombre rollizo que no se quita de la cabeza su sombrero aguadeño.

—Esa fue la jugada sucia de las compañías para tratar de mover a este pueblo de su lugar. Compraron los títulos, compraron las casas, compraron los comercios, y empezaron a dejar todo abandonado o a destruirlo. Parece que su intención no era ni siquiera explotar las minas: era dejarnos sin trabajo a los mineros tradicionales, que hemos sido su mayor obstáculo para poder empezar el proyecto de minería a cielo abierto.

El personal de seguridad de la empresa canadiense se encargó de ponerles candado en la puerta a cada una de las minas que habían comprado. De esa forma, ni ellos mismos las explotaban, dejando inactivos a los mineros que habían contratado, ni los guacheros podían entrar a aprovecharse del oro que los dueños de los títulos habían dejado a la deriva.

Corría 2008 y el pueblo estaba tenso como nunca antes. La compañía, después de comprar desafortunadamente propiedades a los marmateños, se había quedado quieta. Para la mayoría era un misterio lo que se cocinaba de puertas hacia adentro. Los que alcanzaron a oler la situación no reaccionaron rápidamente. Al final, a todos los tomó por sorpresa cuando, el 12 de noviembre de ese año, dos camiones grandes de mudanzas llegaron a la sede de Colombia Goldfields y se llevaron todo.

El alcalde de esa época, Uriel Ortiz, un negro acuerpado que desde el principio promovió el traslado de la parte antigua hacia El Llano, le dijo a La Patria, el periódico de Manizales, que “la compañía está quebrada y el proyecto de acá se fue al piso”. No exageraba: un mes después, tras los estragos de la crisis económica

mundial y una deuda de miles de millones de pesos, los canadienses cerraron sus puertas.

Óscar Arias, un antiguo empleado administrativo de Colombian Goldfields, que ahora trabaja con Gran Colombia Gold, recuerda que más de 200 mineros marmateños perdieron su trabajo tras el cierre. “Muchos se empezaron a ir — explica—. Se fueron a Cauca, a Antioquia, a Norte de Santander, a todos los lugares donde hay actividades extractivas, que es lo único que saben hacer. Los que se fueron se llevaron a sus familias y se fueron a buscar mejor suerte. Por acá pocos han vuelto”.

Pero la historia de Marmato, me había dicho varias veces Yamil Amar, es cíclica. Tras la desintegración de Colombia Goldfields llegó Medoro, que compró lo que sus hermanos canadienses habían dejado botado. Y luego Gran Colombia Gold, la empresa que actualmente explota las minas marmateñas.

—Gran Colombia Gold, igual que Medoro, tuvo una época de comprar minas y cerrarlas. Y esas minas, antes de llegar ellos, tenían una constante en ocupar ciertos trabajadores. Nosotros hacemos la cuenta de los trabajadores que permanentemente siempre se tenían. Entonces una empresa tenía 120 trabajadores y terminaron con 2 o 3: o sea 117 trabajos perdidos— explica Yamil.

No fue solo él. Un ingeniero llamado Jesús Molina se dedicó a averiguar, mina por mina, cómo era la producción y cuántos empleos se reducían. Hizo el trabajo y reconstruyó que eran 833 personas.

—Muchos de ellos se fueron a otras partes, igual que había pasado antes. Algunos dejaron a sus familias, esperando volver cuando hubiera mejor suerte, pero otros agarraron maletas, mujer e hijos y partieron. Con ellos el municipio y la misma Nación también se perjudicaron, porque al haber cerrado tantas minas no es solo que no había trabajo sino que no se podían beneficiar la cantidad de minerales que

antes se beneficiaban, porque los molinos también los destruyeron, y por ende entonces no había medio circulante en el pueblo— agrega Yamil.

El éxodo de trabajadores fue un golpe en la cara para la pequeña minería en Marmato. No había títulos mineros y huía de a pocos la fuerza laboral. La gran minería también estaba detenida, o al menos menguada. Al golpe en la cara le siguió un gancho al estómago: por presión de Gran Colombia Gold, en el municipio se reguló la venta de Indugel, el explosivo que utilizaban desde hace años para detonar las vetas y sacar el oro.

Julio César López, un minero artesanal, explica el problema: “antes en el Batallón nos vendían la pólvora, hasta nos la fiaban. Uno pedía 30 cajas y 30 cajas le daban. Nunca había habido problemas con eso. Pero luego se inventaron que estábamos vendiendo esa pólvora a grupos criminales y la restringieron”.

Desde hace dos años, en Marmato solo tres personas pueden comprar pólvora. Ahora se necesita una licencia, que se sustenta con un título y otros documentos, y que la mayoría de mineros no lograron obtener.

—Antes nosotros hacíamos un estudio de qué dinamita íbamos a necesitar en la mina. Ya ahorita no. Ahorita un estudio de esos se le presenta a la Agencia Nacional Minera, ellos mandan un ingeniero a mirar y él es el que dice “véndales tanto explosivo”. Entonces a veces llega un ingeniero nuevo y va a una mina donde se consumen fácilmente cincuenta cajas al mes y él les autoriza la mitad. Ponen a todo el mundo a trabajar con las uñas. Son errores que se cometen desde allá— afirma Julio César.



Todas las casas de la parte alta de Marmato tendrían que ser trasladadas si la multinacional decide explotar a cielo abierto.

Los que no trabajan con las uñas lo hacen a riesgo. Después de que Gran Colombia Gold abandonó minas, muchos de los mineros que quedaron, desesperados por el desempleo, se aliaron y fueron a romper los candados que los separaban de su trabajo, se encontraron con que no tenían forma de reventar las paredes que contenían el oro. Recursivos y osados, empezaron a preparar un explosivo artesanal que conocen como pólvora blanca, compuesto, entre otras cosas, por azúcar. La pólvora blanca, a diferencia del Indugel, detona mucho más fácil. A 2015, reseña el director del cuerpo de bomberos de Marmato, iban 32 accidentes relacionados con pólvora blanca. Mineros sin ojos, sin brazos, sin piernas. Mineros muertos.

El abandono de las minas por parte de sus nuevos titulares condujo a los afectados a encontrar un hueco en la letra pequeña de los documentos que expide la Agencia Nacional Minera. Allí dice —me resume el ingeniero Fernando Martínez— que si

una mina permanece abandonada por más de seis meses, aunque esté titulada, puede ser explotada por alguien más.

Decenas de guacheros entrando por la fuerza (aunque, según ellos, amparados por la ley) a las minas de una multinacional llevó a Marmato una guerra previsible, que se terminó de fraguar durante el Paro Nacional Minero de 2013, cuando la Fuerza Pública, encabezada por el Esmad, trató de desalojarlos. Pero la violencia de la garrotera entre guacheros y policías, ampliamente reseñada por medios nacionales, tampoco pudo resolver la disputa en la que los gobiernos y las leyes han fracasado sistemáticamente desde hace décadas.

Quizás lo único que logró probar fue la sospecha de antaño de que los marmateños están amarrados a su montaña. No se van a ir fácil.

Tres años después del Paro, Gran Colombia Gold ha ido reanudando sus actividades en las minas que le pertenecen. En los juzgados y las oficinas de la Agencia Nacional Minera se siguen tratando de resolver disputas entre grandes y pequeños para ver quién tiene el derecho de explotación. Hace algo más de un año, declararon a varios medios de comunicación que habían desechado la idea de explotar a cielo abierto. El director de la compañía, Lombardo Paredes, dijo en un boletín de prensa que se iban a “concentrar en expandir la operación subterránea” y agregó que “ya se ejecutó una primera fase para llevar la producción de Marmato de 24 mil a 30 mil onzas por año”.

La multinacional no para.

Mientras tanto, decenas de minas permanecen teóricamente cerradas. Para algunos marmateños, eso equivale a desempleo. Junto a las minas están los escombros de algunos molinos. Otros los reconstruyeron y otros siguen en pie. Adentro de las minas, silenciosos, trabajan todos los días los mineros de cascos amarillos. Sacan oro, lo muelen, lo pesan, lo venden. Una y otra vez.

Abajo, en El Llano, aparecen cada vez más comercios: bares, restaurantes, papelerías, compraventas de oro. El colegio y el hospital, gigantes, abrieron en obra gris y no tienen una demanda que se equipare al tamaño de su oferta. Arriba, en el centro histórico de Marmato, casi todo está en ruinas. Al lado de una casa a la que le robaron las puertas y las ventanas reposa un busto de Alberto Gallego, el marmateño más rico y más ilustre que lo perdió todo.

Parada sobre un pedazo de concreto destruido, la dueña de la única cafetería de la parte antigua de Marmato me habla de los buenos años de su negocio, de por qué resistió entre los escombros y me explica, como si la hubiera inventado, la popular metáfora de la rana en la olla:

—Mire, si usted va a cocinar una rana y la mete de una vez en el agua hirviendo, la rana salta. Pero si la mete en agua fría y la va calentando lentamente, va a morir igual, pero va a poner menos resistencia. Eso es lo que quieren hacer con nosotros. Pero aquí no somos ranas.

Manual para reducir un pueblo a la mitad

A La Palma, en la punta norte de Cundinamarca³, se sube por un camino frío y culebrero. Un bus tarda cuatro o cinco horas desde Bogotá. Nada más pasar la frontera desde El Peñón, por el sur, aparece en la carretera un letrero de bienvenida al municipio con su población total: 10.453 personas.

Me bajé del bus casi un kilómetro más adelante. A la izquierda de la vía que sube, cuatro cruces de madera, de unos tres metros de alto, se erigen firmes en el patio de

³ Por recomendación del jurado Germán Ortiz Leiva, al texto de La Palma le agregué un mapa que explica por qué la ubicación de ese municipio fue un escenario clave de la disputa entre guerrilleros y paramilitares. El mapa se encuentra como anexo al final de la crónica.

una casa abandonada y colonizada por la maleza. Una mujer rolliza, de piel morena, se me acerca y me explica lo que quiero saber sin que se lo pida: “Ahí hubo una masacre. Mataron a un señor de apellido López y a los hijos y a un hermano. Esa creo que fue la guerrilla. O los paramilitares”.

La mujer dice que se llama Lucy, a secas, sin dar un apellido, y me acompaña a la casa enmalezada que hay cerca de las cruces. “Aquí a veces no sabemos quién mató a quién, pero sí que vimos matazones por estos lados. Por eso la gente se fue”, apunta, asomada por el marco vacío de lo que alguna vez fue una ventana.

Una mirada aritmética a La Palma abre la puerta para entender la forma en que los actores armados, como en otras zonas del país, se volvieron una sola tormenta de problemas y condenaron a una población que poco pudo resistir. Los números son así: en 2001, La Palma tenía más de 22 mil habitantes. Ahora, como dice el cartel, hay poco más de 10 mil. El Registro Único de Víctimas aclara que durante lo que va este siglo hubo 14 mil desplazamientos de palmeros a causa de la guerra. El excedente, de casi 2 mil personas, son casi todas familias que volvieron en los últimos años a buscar lo que habían dejado tirado.

Llegué a La Palma un domingo, con esas cifras en la cabeza, para reconstruir la historia de las sumas y las restas que durante la última década sufrió la valla que anuncia la población del pueblo.

La historia empieza así. En 1982, tras acabar de Séptima Conferencia de las Farc en Meta, los miembros del secretariado de esta guerrilla ordenaron crear el Frente 22: lo ubicaron en los municipios de Cundinamarca cercanos a Bogotá y decretaron que su principal función era suministrar recursos para las Farc. Entre esos municipios cercanos a Bogotá estaba, por supuesto, La Palma, alguna vez rico y próspero pueblo cafetero. También Yacopí (donde desde los setenta operaba levemente el Frente 11) y Caparrapí. El 22 reemplazó al 11 y, en poco más de una década, según explicó más adelante una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá,

logró tener control casi absoluto de La Palma, La Peña, Villeta, Guayabal de Síquima, Guaduas, Caparrapí y Topaipí.

—Esos eran unos sinvergüenzas, unos mierdas, pero convivíamos al menos— me dijo más tarde Eduardo Anzola, un viejo estudiado y dicharachero, que escribió hace pocos años un libro titulado “Tras las huellas palmeras”, donde reconstruye la historia del pueblo desde la colonia hasta la violencia paramilitar y guerrillera. Eduardo vive en el casco urbano, en una casa amplia y llena de peceras.

Entre algunos de los habitantes más viejos de La Palma hay una tendencia indulgente hacia las guerrillas de los setenta, ochenta y principios de los noventa. Suelen defender que, aunque lo que hacían no era bueno, de alguna forma era justo o necesario. Toda la región de Rionegro, donde está ubicada La Palma, fue de larga tradición liberal y más adelante sumó importante caudal electoral al Partido Comunista. Años más tarde, sin embargo, la Fiscalía estableció que los crímenes que más cometió las Farc durante esa época fueron extorsión, hurto y secuestro: tres delitos que se desdibujan con el tiempo en la memoria de algunos palmeros.

Las Farc, me explica Eduardo, mientras lee el texto impreso de una sentencia de Justicia y Paz que guarda en un cajón, se movían en pequeñas escuadras, atacaban puestos de Policía, robaban bancos, y secuestraban ganaderos para exigir el pago de vacunas. El alcance de esas escuadras no era menor: en 1993, por ejemplo, mataron a alcalde del municipio, Enrique Fajardo, y al director del Instituto de Aguas y Saneamiento de Cundinamarca, Gilberto Bustos, mientras se desplazaban en una camioneta por la carretera que conduce a Caparrapí.

La violencia, sin embargo, no era masiva: los blancos seguían siendo dirigidos y normalmente coincidían con los focos de poder político y económico. Al menos así fue hasta 1998. En ese momento, con la creación del Comando Conjunto de Occidente, liderado por alias Marco Aurelio Buendía, la estrategia de las Farc en Cundinamarca pasó de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos:

empezaron a tomarse las cabeceras urbanas de municipios como Yacopí, Cabrera y La Palma.



La Palma, Cundinamarca, es un pueblo con una larga tradición religiosa. En distintas épocas se ha visto manchada por la violencia.

Esas tomas de municipios, recuerda Fanny Arrieta, una matrona diminuta que vive de cocinar almuerzos cerca al parque principal del pueblo, “eran de más o menos cien hombres armados”, que hostigaban los puestos de control de la Policía, quemaban algún comercio y gritaban consignas y discursos. Para esa época no había ejército en la zona. La sentencia que leía Eduardo aclara que, antes de llegar armados a la plaza, los guerrilleros se vestían de civil y, en células de menos de diez, hacían trabajo de infiltración e inteligencia previa.

“Eso pasó una que otra vez, aunque aquí no fue tan horrible como cuentan en otros municipios. De pronto porque este ya era un pueblo guerrillero”, me dice Fanny, entre risueña y exagerada.

A finales de los ochenta llegó a la zona el que años más tarde se convertiría en el gran villano de los palmeros: Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila. Cifuentes se había entrenado durante principios de esa década con las emergentes autodefensas de Puerto Boyacá. Él mismo declaró años después que un hombre llamado Enrique Rivera, de alias Zapata, comandante paramilitar en el Magdalena Medio, le había perdonado la vida a cambio de unirse a ellos, en 1986. En 1989, El Águila llegó a Yacopí, a pocos kilómetros de La Palma, y manteniendo un bajo perfil y una especie de tregua con la guerrilla se instaló en la zona. Alias Zapata, nuevamente según El Águila, lo envió a prepararse durante dos años en las inspecciones de Tórax y Terán, ambas en Yacopí.

Cifuentes operaba según las directrices de Henry Pérez, alias Móvil 20, quien pacientemente había empezado a reclutar jóvenes milicianos de las Farc para formar un ejército de mercenarios que conocieran bien el territorio. Móvil 20 era líder de las Autodefensas del Magdalena Medio y sucesor de Pablo Guarín Vera, un corpulento paramilitar boyacense. Por la época en Pérez que comandó a ese grupo armado, en los años ochenta, el narcotráfico se había metido en el Magdalena Medio y se había tejido una suerte de alianza con personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha, que fue la base para que ocurrieran masacres como la de La Rochela. Tras la muerte de Rodríguez Gacha, Móvil 20 se replanteó su relación con el narcotráfico. Esa decisión le causó una pelea a muerte con Pablo Escobar, con quién divergían en las tácticas de guerra. Henry Pérez murió baleado un par de años más tarde, en 1991, presuntamente a manos de sicarios de Escobar, y su guerra la heredó el fúnebremente célebre Ramón Isaza.

Para la época los grupos armados operaban a dos ritmos en el norte de Cundinamarca. Los paramilitares apenas emergían en esa zona, aunque en el Magdalena Medio tenían más fuerza y eran entrenados por Yair Klein, un mercenario israelí que había llegado a Colombia en 1988 y había enseñado tácticas de guerra a los hermanos Castaño. Mientras tanto, la guerrilla alcanzaba uno de sus

picos históricos de poder. La Fuerza Pública era un actor casi insignificante en esa disputa de control.

El frente 22, con cerca de mil hombres en Cundinamarca, según registros de prensa de la época, y con grandes aportes económicos producto del secuestro y el robo de ganado, era próspero para los intereses de las Farc, que buscaban llegar a Bogotá. Se expandieron y crearon las columnas Reynaldo Cuellar y Esteban Ramírez. Según declaró ante Justicia y Paz Gustavo Lasso Céspedes, alias El Gato, jefe de finanzas y orden público de la columna Esteban Ramírez, la zona de distensión —de 42 mil kilómetros y cinco municipios entre Meta y Caquetá— que creó el gobierno de Andrés Pastrana en 1998, en el marco de los fallidos diálogos de paz con las Farc, sirvió de escenario para entrenar jefes de frentes de esa guerrilla, que luego se dispersaron por todo el país.

Cerca de la plaza principal de La Palma, entre las casas que la administración pintó de amarillo durante la década pasada, está la estación de la Policía. Un intendente relativamente joven y conocedor del pueblo, que prefirió reservar su nombre, me explicó que, hacia finales del siglo pasado, las Farc decidieron poner a un hombre llamado Wilmer Antonio Marín, alias Hugo, al mando del frente 22, y bajo sus órdenes la guerrilla se fortaleció militarmente en tres veredas del municipio: El Potrero, Hoyo de Garrapatal y Zumbe.

En La Palma empezó a rondar un miedo que se prolongó durante las siguientes dos décadas.



La Unidad de Víctimas ha ayudado a implementar proyectos productivos a campesinos víctimas pero, según ellos, no ha sido suficiente.

La Unidad de Restitución, encargada años más tarde de tratar de devolver las tierras a los campesinos expulsados por la violencia en todo el país, registró que en 1991 las Farc mataron a un concejal en La Peña (vecino municipio de La Palma), a un líder cívico de la vereda Hoya de Tudela, al comisario de la vereda La Hermosa y a una familia en la vereda El Potrero. Toda esa sangre se derramó dentro de los 141 kilómetros cuadrados que le corresponden a La Palma. En la región, me explica Carolina Bonilla, una funcionaria de la Unidad de Víctimas en Cundinamarca, reinó el miedo. “Como la guerrilla restringió la salida de las casas después de las cinco de la tarde y el tránsito por las veredas sin permiso y a deshoras, la gente quedó prácticamente atrapada”, me dice.

Bonilla me aclara, además, que las veredas más afectadas durante los noventa y principios de este siglo, a raíz del fortalecimiento guerrillero, fueron Hoya de Tudela, Amococo, Marcha y Hoyo de Garrapatal. Entre 1998 y el 2000, según datos

del Registro Único de Víctimas, salieron de La Palma 1.203 personas y solo regresaron 214. A grandes rasgos, esa proporción se mantuvo en el tiempo: salieron muchos y volvieron pocos.

En esa época, por fuera de lo que ocurría en La Palma, uno de los objetivos del fortalecimiento de la guerrilla era, por órdenes del Comando Conjunto de Occidente, tomarse la cabecera municipal de Yacopí.

En el norte del municipio está una vereda llamada La Aguada. La componen pocas casas, muy alejadas una de otra. Allí está la frontera entre La Palma y Yacopí. Martha, a quien le cambio el nombre por petición suya, me cuenta que ha vivido toda su vida, excepto tres años, en esa vereda. Me señala un pedazo de la montaña, a pocos cientos de metros, y me explica que de ahí hacia acá era territorio de la guerrilla. Un territorio que, contadas excepciones, respetaban con rigor.

La excepción más grande, relata vagamente un documento de Justicia y Paz (y confirman, también vagamente, algunos palmeros), fue la toma guerrillera del casco urbano de Yacopí, en 1998. A sangre y fuego se apoderaron del pueblo durante un par de días. La acción militar fue producto de la doctrina militar decidida en la Octava Conferencia, donde se planteó fortalecer las estructuras políticas clandestinas y reorganizar las estructuras armadas en bloques regionales o comandos conjuntos: todo con el fin de urbanizar el conflicto. Las Farc, entonces, mandaron a su brazo político con anticipación para infiltrar Yacopí, donde había cuatro concejales del Partido Comunista. A la vez que el brazo armado del Comando Conjunto de Occidente preparaba los detalles militares de la toma, que acabó por ocurrir en julio de 1998.

Las autoridades locales reportaron que, hacia las cuatro de la tarde, más de cien hombres del Frente 22 atacaron el comando de Policía, la Caja Agraria y el Banco Cafetero. No hubo víctimas civiles. Murieron tres policías y tres guerrilleros.

La operación, para las Farc, fue un éxito. El Águila confesó muchos años después que fue esa toma la que motivó la reorganización definitiva de los grupos paramilitares en la región. El excomandante paramilitar explicó que creó estatutos internos, preparó escuelas y cursos de entrenamiento y colocó antenas en sitios clave para facilitar la comunicación. Cifuentes contó a justicia y paz que él mismo, acompañado de un exintegrante del Ejército, dirigía los entrenamientos de más de cincuenta hombres en canchas de fútbol de Yacopí. Los cursos duraban entre diez y veinte días: enseñaban a emboscar, a defenderse, a manejar armamento e impartían doctrina política.

El Águila explicó que por esa época la financiación era precaria: no les pagaban sueldo a sus patrulleros y estos no combatían tiempo completo. En 1999, sin embargo, el grupo armado empezó a tomar forma y El Águila llamó a Henry Linares, alias Escorpión, para que, entre otras cosas, se encargara de las finanzas. Escorpión, que también se encargaba de conseguir munición y armamentos, se ubicaba en la zona urbana de Puerto Salgar, por donde pasaban los poliductos, y, palabras de Cifuentes, “le cobraba al cartel de la gasolina y tenía que entregarme cuentas a mí. Él recibía finanzas y las redistribuía entre Tumaco y Narciso, dos subcomandantes que se encargaban de sostener a sus hombres.

En ese momento, relató El Águila a Justicia y Paz, se fraguó definitivamente la creación del Bloque Cundinamarca de las Autodefensas.

El Bloque creció más y más, y se diversificaron sus fuentes de ingresos. Impulsados por narcotraficantes, ganaderos, miembros de la Fuerza Pública y dinero proveniente del robo de gasolina, se desplegaron hasta Puerto Salgar, Caparrapí, El Peñón y Topaipí. En el 2000, el Bloque Cundinamarca estrenó el milenio e hizo sus primeras incursiones en La Palma, donde hasta ese momento gobernaban las Farc. Ese año, tras el fracaso de los diálogos entre el gobierno de Pastrana y el secretariado de esa guerrilla, también llegaron a la región hombres armados que habían salido de la zona de distensión, en Caquetá y Meta, con la misión de reforzar el Frente 22.

Los estigmas de décadas pasadas, que decían que los civiles de La Palma eran guerrilleros y los de Yacopí eran paramilitares, le echaron leña al fuego.

Entre 2000 y 2002 se abrió el telón rojo. Los actores estaban dispuestos. Las motivaciones, sobre la mesa: venganza, control, dinero. El escenario era ideal. Dos años duró el prólogo de la obra atroz que vivieron en carne propia los palmeros durante los años siguientes.

—En 2002 me desplazaron la primera vez— me dice Luz Mary Farfán, acaso la líder más reconocida de la parte rural del municipio—. Fue el 2 de agosto de 2002 y lo recuerdo como si hubiera sido esta mañana.



Una parte de las casas de las más de 50 veredas se encuentran todavía enmalezadas por el abandono.

Luz Mary no mide más de un metro sesenta, tiene brazos gordos y pelo corto y tieso. En agosto de 2002, vivía con sus dos hijos, un niño y una bebé recién nacida, en una vereda llamada Hoya de Tudela. El segundo día de ese mes, esa fecha que Luz Mary ahora recuerda con un rostro impassible, un grupo de paramilitares, al mando de alias Tumaco, provenientes de Yacopí, reunieron sobre la carretera a los pobladores de la vereda.

—Eso empezaron a gritar desde afuera de las casas. Sin tocar la puerta. “¡Salgan todos, hijueputas!”. Y me perdona la grosería. Pero así eran. Nos sacaron a todos ahí sobre la vía y nos dijeron que se iban a volear bala con la guerrilla. Que nos estaban advirtiendo. Que nos fuéramos. Que nos daban doce horas para coger las cosas y largarnos.

A otros ni siquiera les advirtieron. Casi indiscriminadamente, los hombres de alias Tumaco decidieron que algunos eran auxiliares de las Farc y los mataron. Luz Mary me cuenta la historia de un joven, a quien sacaron de su casa a la fuerza. Lo torturaron frente a su madre porque no aceptó unirse a las filas paramilitares. “A mi hijo lo mataron delante mío y yo no pude hacer otra cosa que suplicarles que no lo hicieran. Luego de eso me dijeron que no me querían volver a ver y por eso me fui de mi finca y no pienso regresar”, dice el testimonio de la madre en ese documento, registrado en una nota del portal Verdad Abierta.

Luz Mary me cuenta su historia mientras caminamos por la carretera hacia un pedazo de tierra donde tiene sembradas limas dulces y mandarinas. Me dice que algo similar a la historia del joven le ocurrió le ocurrió a Carmen, una vecina suya, quien tuvo que salir de su finca con sus tres hijos porque los paramilitares acusaron a su esposo de ser un supuesto auxiliar de las Farc. “Llegaron en la mañana buscando a su esposo, le decían a Carmencita que él era colaborador de la guerrilla y que como no estaba en la casa lo iban a buscar para matarlo”, me cuenta.

El 3 de agosto de 2002, La Palma amaneció con 62 habitantes menos. Ese fue documentado como el segundo desplazamiento masivo del municipio causado

directamente por los paramilitares. Con el viento corría el rumor de que tiempos mucho más difíciles estaban por llegar.

Aunque los documentos judiciales que analizaron la violencia en La Palma solo cuentan poco más de cien desplazamientos forzados por paramilitares y guerrilleros, la realidad, se sabe, fue exponencialmente peor. Las diferencias entre una cifra y otra son de miles de personas. Para el año 2003, por ejemplo, la Unidad de Víctimas dice que hubo 8 mil desplazamientos en el municipio. Sin embargo, desmovilizados del Frente 22 y del Bloque Cundinamarca solo respondieron directamente por una mínima fracción.

La explicación para ese desequilibrio la dio la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. “Luego del análisis —dice un documento—, la Sala observó tres tipos diferentes de desplazamiento forzado”. El primero fue denominado “estratégico”: se hacía como política de grupo, las órdenes llegaban desde arriba y mediante amenaza directa les exhortaban a las víctimas que abandonaran el territorio, dándoles un tiempo límite. Al segundo lo llamaron “oportunista”: también funcionaba con amenazas directas, pero obedecía a motivos individuales de algunos hombres dentro de la estructura criminal, quienes actuaban por venganza, envidia o afán de enriquecerse a costa de otros.

Finalmente, al tercer tipo de desplazamiento lo llamaron “consecuencial” y allí cabrían casi todos los que ocurrieron en esa región del país. Dice la Sala: “muchos hechos ocurrieron de manera indirecta [...] por ejemplo, las personas tomaron la decisión de abandonar el territorio sin que las hayan amenazado de manera directa y les hayan puesto un límite temporal de salida. En este tipo de casos, los desplazamientos ocurrieron porque las víctimas sintieron miedo de morir en eventuales enfrentamientos armados entre el Ejército, la guerrilla y los paramilitares, o porque sintieron miedo de que sus hijos fueran reclutados de forma ilícita en un futuro”.

Eduardo Anzola, el escritor, me explicó ese fenómeno en tono poético. Con voz pausada, como si diera una homilia, me dijo: “El miedo se traspasa como una cadena de dominó. A la primera ficha la tumban, la derriban, y de ahí para atrás solo es cuestión de tiempo para verlas caer a todas. Aquí muy pocas quedaron en pie”. El miedo, en efecto, no siempre era directo, el objeto de terror no siempre estaba al frente, pero nunca era infundado: el victimario podía estar detrás, a la vuelta de la esquina, podía estar por venir, y muchas veces la única defensa era anticiparse, ser más rápido que él, huir primero.

—¿Sumercé ha visto cómo atracan a alguien en un bus? —me preguntó Luz Mary Farfán—. ¿Cierto que queda con miedo de volver a montarse en esa ruta?, ¿cierto que a todo el mundo le empieza a ver cara de ladrón?, ¿coge la maña de mirar para atrás a ver si no viene nadie? Pues imagínese: eso es con un atraco. Ahora diga un asesinato. Una masacre. Vienen unos tipos y matan a toda una familia en la finca de al lado. Usted oye que están poniendo minas quiebrapatas por donde sus hijos caminan. Y que, como si fuera poco, esos desgraciados están llevándose también a esos niños para que se les unan. Si usted quedó con miedo de montar en bus, imagínese nosotros. A mí nunca me amenazaron, pero claro que me fui corriendo, ¿no ve que tengo dos hijos?



Vestido de civil, un policía recuerda la época más violenta de La Palma.

Luz Mary me contó más tarde que su hijo mayor, al ver cómo reclutaban a sus amigos, cómo no podía salir a jugar igual que antes, cómo su madre se la pasaba llorando, intentó suicidarse. Huyeron al instante, como miles de familias más durante ese año y el siguiente.

En 2002 siguió la violencia. Un vecino me cuenta que los paramilitares asesinaron delante de su familia a un líder de su vereda. Otro dice que guerrilleros torturaron y mataron un joven en frente de su madre y hermanos. Una sentencia enumera decenas de hechos similares: que paramilitares ordenaron a toda la vereda Minipí de Quijano que desocuparan las viviendas en un día, que asesinaron a dos jóvenes más, acusándolos de colaborar con la guerrilla, y que en diciembre mataron a un concejal y abandonaron su cuerpo con el letrero “por sapo y por ser funcionario público”. Hechos parecidos ocurrieron en otras veredas, como Marcha, Boquerón y El Hato.

El 15 de septiembre de 2002 ocurrió uno de los desplazamientos más grandes de palmeros, si no el más grande: alias Tumaco y alias Rasguño instalaron un retén en un lugar que los habitantes conocen como La Villa, donde empezaron a detener carros y mataron a un par de hombres y le pidieron a todos los que habían detenido que se repartieran por las veredas cercanas y anunciaran a los pobladores que tenían 24 horas para salir del pueblo. Mientras tanto, revisaban los documentos de todo el mundo, fijándose si estaban en una lista negra que cargaba Tumaco en el bolsillo del pantalón, donde aparecían los nombres de supuestos auxiliares de la guerrilla.

Ese día, con lo que les cupo en las manos, salieron del pueblo decenas de familias.

La Fiscalía, una década después, explicó parte del modus operandi de ese mar de sangre: dijeron que los paramilitares, bajo las órdenes de El Águila, torturaron a sus víctimas con quemaduras, ácido y heridas con arma blanca. Explicaron, como si a estas alturas hiciera falta, que infundir terror esa una de sus principales estrategias.

Mientras una matrona persigue a su hijo pequeño para golpearlo con una chancla, su hija mayor, Leidy Bohórquez, me conduce hacia una cancha de microfútbol de cemento, como de barrio, ubicada trocha arriba de la carretera principal. Aunque me la presentó como “el polideportivo”, los aros de las canchas de baloncesto estaban destrozados y las gradas cobijadas por una maleza alta y espesa. Junto a la cancha hay una casa de aspecto fantasmagórico, abandonada hace años, sin puertas ni pisos ni techos ni ventanas.

—Aquí venía yo a jugar cuando era chiquita— me dice, y me aclara que ahora tiene 27—. Por esa época yo no entendía muy bien lo que pasaba, ¿sí? Mi mamá me decía que no podía volver a jugar y yo me ponía brava. Un día nos dijo que teníamos que empacar lo que pudiéramos, me dejó coger dos muñecas y nos fuimos para la casa de unos tíos en Bogotá. Allí estábamos muy estrechos y nos tocaba dormir en el mismo cuarto a los tres, más otro primo que vivía con ellos. Allí no aguantamos mucho, mi mamá no quería incomodar, Bogotá es fea, es grande, mi mamá acá

cultivaba cualquier cosa y de eso vivíamos, en la ciudad no se podía. El caso es que ella no aguantó y vio que nosotros tampoco y nos devolvimos. Pero cuando llegamos, otra vez estaban matando gente y había combates y yo creo que no duramos ni un mes hasta que nos tocó empacar maletas de nuevo. Ahí sí duramos como cinco años por fuera. Yo terminé el bachillerato en Bogotá.

Durante 2001, 2002 y 2003, a la par de los grandes desplazamientos había pequeños intentos de retorno. En 2002, por ejemplo, de la mano de la Gobernación de Cundinamarca y la Cruz Roja, un grupo de familias intentó volver, pero encontraron sus casas saqueadas y su pueblo intranquilo. Los retornos se convertían en nuevos desplazamientos y engrosaban las cifras.

El periodista Óscar Bustos, en una crónica llamada “Los militares no devuelven un favor”, relató cómo no había garantías para volver porque ni siquiera los funcionarios estaban en el pueblo para asistir los retornos: “Nos dirigimos a la Alcaldía, pero encontramos grandes candados en las puertas. El Alcalde abandonó su oficina hace varios meses y dicen que atiende desde Bogotá. Tampoco funciona el Concejo, y la única entidad que promociona sus servicios es la funeraria del pueblo”.

En 2002 había llegado Álvaro Uribe a la presidencia. La gran promesa que impulsó su elección fue que acabaría con las Farc, que durante el gobierno anterior se habían expandido y se hacían ver fuertes en su propósito de llegar a Bogotá. Hacia finales de 2003, mientras La Palma empezaba a sufrir su mayor éxodo, arrancó la primera fase del que se conoció como Plan Patriota: un descomunal despliegue de fuerza para menguar a la guerrilla. A mediados de octubre de 2003, las Fuerzas Armadas mataron a alias Marco Aurelio Buendía, jefe del Comando Conjunto de Occidente, en una zona rural entre El Peñón y Topaipí. En diciembre de ese mismo año capturaron a Gustavo Lasso Céspedes, alias el Gato, jefe de la columna Esteban Ramírez.



El “polideportivo” del pueblo no ha sido recuperado desde que la violencia le pasó por encima.

—Esa fue prácticamente la salvación de La Palma. Las Farc llevaban metidas acá más de treinta años y había que sacarlas a la fuerza, como fuera, ¿sí me entiende?— me dijo otro policía en el casco urbano del municipio.

Otros habitantes, sin embargo, le agregan matices a esa percepción.

—Claro que fue bueno. Cómo no va a ser bueno frenar a esa gente que nos hacía tanto daño. Yo no lo viví porque estaba desplazada, pero lo que se supo después fue que el Ejército tuvo que derramar mucha sangre por allá. Hubo mucho más combate por acá. Acabar con la guerrilla no fue a cualquier precio. Eso lo tuvieron que pagar los palmeros que se quedaron. No le voy a decir que no: aquí también hubo desplazados por culpa del Ejército, pero eso nadie lo dice. Además los paramilitares seguían— me explicó Rocío Rincón, quien hace años integra una pequeña asociación de víctimas de La Palma, aunque casi nunca se reúnen.

Nadie, hasta ahora, ha medido cuantitativamente qué tan grandes fueron los estragos que causó la Fuerza Pública en su afán de recuperar ese municipio. Sobre ese asunto solo quedan algunos recuerdos de los combates y cabos sueltos sobre alianzas de militares y paramilitares para derrotar a la guerrilla.

Casi en fila, sumándose al Plan Patriota, llegó en 2004 otro hito indispensable para entender la violencia en La Palma y en el resto del país: hubo una desmovilización masiva de paramilitares, en el marco del proceso que se conoció como Justicia y Paz. En diciembre de 2004, en la zona rural de Yacopí, se desmovilizaron los hombres que delinquían en el Bloque Cundinamarca de las Autodefensas. 148 paramilitares entregaron sus armas ese día.

Para 2005, teóricamente, ya no existían ni los paramilitares ni la guerrilla en La Palma. Pero el pueblo seguía pareciendo fantasma. De las 22 mil personas que lo habitaban en 2001, más de la mitad había huido. Los retornos durante los primeros años fueron grano por grano, familia por familia. Algunos, esporádicamente, se animaban a volver a buscar la relativa estabilidad de sus vidas pasadas.

Sin embargo, al menos hasta 2008, las Farc hicieron presencia en La Palma, según un informe de Verdad Abierta en 2015. A eso se le suma que, después de la desmovilización paramilitar de 2004, algunos exintegrantes del Bloque Cundinamarca regresaron al municipio. Allí reside gran parte de la respuesta a por qué la gente no retornó masivamente: no era seguro.

Durante los últimos años, con mayor fuerza desde 2011, tras la puesta en marcha de la Ley de Víctimas, que se creó para dar ayuda humanitaria, reparación simbólica y asistencia a los más de 7 millones de damnificados por la guerra, ha habido mejores condiciones para volver. Aunque todavía muy lejos de las ideales.

Luz Mary Farfán me cuenta que regresó hace tres años. Encontró su finca intacta, en el mejor y en el peor sentido de la palabra: no se habían llevado nada, por un

lado, pero por otro lado el tiempo había pasado factura a la zona donde cultivaba y a su casa, que sin mantenimiento durante más de ocho años se agrietó y se vio devorada por la vegetación vecina. “No le voy a decir que el Gobierno no nos ayudó en nada. Aquí vinieron unas muchachas muy preparadas de la Unidad de Víctimas a asesorarnos en todo lo del regreso: en la atención psicosocial, en los proyectos productivos. Como todo, no fue perfecto, además porque ellas están en Bogotá y venir hasta acá les queda difícil a veces”, me dice Luz Mary.

La Ley de Víctimas creó la Unidad de Restitución de Tierras para tratar de sortear el gran obstáculo que significan para la reparación más de 6 millones de desplazados. Hacia finales de 2013, la Unidad, tras priorizar los casos, definió que en La Palma el desplazamiento había sido aterrador y que había que tomar medidas urgentes. En diciembre de ese año dijeron que ya habían presentado las primeras tres demandas de restitución de tierras y que casi 200 familias habían pedido (o mejor: exigido) garantías para volver, vivir en La Palma y alcanzar la titulación de 382 hectáreas que explotaban antes de que la violencia los espantara.

Cifras oficiales estiman que, de toda la población desplazada de La Palma, ha regresado definitivamente poco menos de 3 mil personas, que equivalen a una cuarta parte de las que salieron. Es un dato que se puede corroborar caminando entre las 56 veredas del municipio, llenas de casas abandonadas. La Unidad de Restitución ha intentado adelantar el proceso para devolver las tierras, pero se ha encontrado con un obstáculo que se repite a lo largo y ancho del país: la gente ya no quiere volver. Muchos llevan años rehaciendo su vida en otros lugares, los jóvenes no sienten arraigo por el campo y las garantías que tienen en su antiguo hogar no son las mejores.

A Luz Mary, casi excepcionalmente, le ha ido bien desde que volvió. Logró empoderarse y se convirtió en una líder activa. Asiste con su familia a los talleres de atención psicosocial, aunque sean esporádicos, y emprendió con un proyecto productivo a partir de sus cultivos. No contempla abandonar de nuevo. “De acá me sacan con las patas arriba”, me dice, pero sabe que sus hijos, “por como son los

jóvenes ahora”, querrán irse pronto a la ciudad. De su pueblo no se quiere ir sino muerta, quiere decir, pero sus hijos están ansiosos por vivir la vida urbana.

No ha sido así para otras familias, que, aunque reconocen que ya no temen por su seguridad, nunca han visto en la práctica algunos de los derechos que tanto les mencionan desde que se registraron como víctimas: memoria, justicia, verdad, acompañamiento, apoyo. La infraestructura del pueblo es precaria: no hay centros deportivos, las instalaciones de los dos únicos colegios dejan mucho que desear, pocos tramos de la carretera están en buen estado, y así podría seguir una larga lista de demandas que escuché de boca de los palmeros. La Palma, de hecho, tiene más del 60% de necesidades básicas insatisfechas.

—Da mucha tristeza que después de todo lo que este pueblo tuvo que pasar haya tanta gente prácticamente pidiéndole una limosna al Gobierno —dice Luz Mary, mientras me alista un generoso bulto de frutas de su huerta antes de que arranque el bus de vuelta hacia Bogotá— Y más tristeza da que ni siquiera limosnas llegan a veces.

Conclusiones⁴

Inicialmente pensé estos dos textos como caras opuestas de una misma moneda. Así quedó consignado en el anteproyecto, en las charlas con José, mi director de tesis, y en las primeras notas que tomé antes de viajar a campo. Esa premisa se mantiene, cómo no: la violencia de actores armados ilegales y la presión de empresas multinacionales son fenómenos muy diferentes. Pero, a raíz de mi experiencia con las comunidades y el estudio que alcancé a hacer de los casos, vi una línea que atraviesa ambos fenómenos. El factor común es la resistencia.

Aunque da la impresión de que estamos en una época donde todo es más ligero, pude ver cómo en el campo la vida funciona a un ritmo diferente. Las decisiones parecen menos apresuradas, hay más arraigo por algunas cosas y, como hay menos oportunidades para escoger, los proyectos de vida se sienten más rígidos y blindados. “Aquí solo sabemos sacar oro” o “¿qué más vamos a hacer si no es trabajar la tierra?” fueron frases que escuché incontables veces tanto en Marmato como en La Palma.

Es por eso que la resistencia, a las buenas o a las malas, parece aferrada al alma campesina. No encontré otra razón por la que miles de mineros lleven décadas buscando formas de seguir haciendo un trabajo riesgoso que paga poco más de un jornal diario. Mucho menos, de no ser por esa resistencia, entendería que cientos de familias retornaran una y otra y otra vez a un pueblo lejano plagado de guerrilleros y paramilitares hasta un día encontrarlo tranquilo y poder quedarse. En Marmato y en La Palma hubo y hay sujetos que ejercen poder y tratan de repeler esa resistencia de distintas formas. Pero en los dos pueblos, como en los otros cientos de casos que esta investigación se podría replicar, pelean con las entrañas porque sienten que no hay otra salida, que dejar de resistir es quedar

⁴ Por sugerencia del jurado Germán Ortiz Leiva, agregué un pequeño apartado con reflexiones a manera de conclusión. Como él recomendó, traté de buscar elementos comunes que englobaran una especie de puntada final al texto.

vencidos. “Las palmas se doblan pero no se quiebran”, me dijo un campesino, aludiendo al nombre de su municipio.

No quiere decir todo eso, una vez más, que los dos desplazamientos que quise mostrar sean análogos. Allí están las historias que conté para intentar probarlo. Son distintos los miedos, distintos los juegos de poder y distintas las reacciones. Los matices traté de imprimirlos en la narración.

Palma, el límite entre los dos municipios fue campo de batalla durante casi dos décadas.

Anexo 2: Listado de entrevistas realizadas en campo

Entrevistas con Yamil Amar para entender el contexto de la pelea que dan los mineros tradicionales de Asomitrama. 4, 5 y 6 de abril de 2015. Marmato, Caldas.

Entrevista con Fernando Martínez, ingeniero químico, para comprender las diferencias de funcionamiento entre la minería tradicional y la explotación a gran escala, además del contexto legal excepcional en que ambas se ha desarrollado en ese municipio. 5 de abril de 2015. El Llano, Marmato, Caldas.

Entrevista con Ulises Lemus, quien me explicó los argumentos por los que rechaza absolutamente la presencia de empresas extranjeras en ese municipio. 4 de abril de 2015. Marmato, Caldas.

Entrevista con Óscar Arias, de Mineros Nacionales, ex Colombia Goldfields y Gran Colombia Gold, varias de las grandes compañías que explotan en la parte baja del pueblo. 8 de abril de 2015. Marmato, Caldas.

Entrevista con Mauricio Castañeda, guachero, durante un recorrido al interior de la mina más grande y más disputada del pueblo. 7 de abril de 2015. Mina Villonza, Marmato, Caldas.

Entrevista con Nelson Deossa, guachero de la mina Villonza, quien me contó con detalles el desarrollo del Paro Minero de 2013, me hospedó en su casa y me llevó a recorrer minas y molinos. 8, 9 y 10 de abril de 2015. Marmato, Caldas.

Comunicado de Juan Manuel Peláez, expresidente de Medoro, la compañía canadiense que compró en la primera década de este siglo más del 80% de los títulos de la montaña. 8 de agosto de 2010.

Entrevista con Gonzalo Castro, exminero tradicional y propietario de títulos que respalda la entrada de compañías extranjeras. 6 de abril de 2015. Marmato, Caldas.

Entrevista con Wilson Castro, personero de Marmato, quien me mostró documentación de su oficina sobre las violaciones que se habrían cometido de uno y otro lado de la pugna. 8 de abril de 2015. Marmato, Caldas.

Entrevista con José Gallego, hijo de Alfredo Gallego, quien junto con su hermano Alberto fue el mayor propietario de títulos mineros en Marmato durante la segunda mitad del siglo XX. 5 de abril de 2015. Marmato, Caldas.

Entrevista con Julio César López, un minero tradicional que prepara ilegalmente pólvora artesanal para poder seguir sacando oro. 6 de abril de 2015. Marmato, Caldas.

Entrevista con Eduardo Anzola, escritor del libro “Tras mis huellas palmeras”, que reconstruye la historia de La Palma durante el siglo XX. 17 de agosto de 2016. La Palma Cundinamarca.

Entrevista con Fanny Arrieta, víctima de los paramilitares en una vereda de La Palma. 18 de agosto de 2016. La Palma, Cundinamarca.

Entrevista con Carolina Bonilla, funcionaria en terreno de la Unidad de Víctimas para Cundinamarca, para comprender el contexto de la guerra en el norte de ese departamento y las medidas que ha tomado el Estado para reparar a las víctimas. 30 de agosto de 2016. Bogotá, Cundinamarca.

Entrevista con Luz Mary Farfán, líder de víctimas en La Palma. 20 de agosto de 2016. Vereda Hoyo de Garrapatal, La Palma, Cundinamarca.

Entrevista con Leidy Bohórquez, palmera que vivió la violencia de niña, se desplazó y perdió familiares en la guerra, para luego retornar a su tierra, casi quince años más tarde. 15 de agosto de 2016. La Palma, Cundinamarca.

Entrevista con un Policía que prefirió reservar su identidad para entender cómo, después de años de ausencia y guerra, la Fuerza Pública volvió a las montañas del norte de Cundinamarca. 16 de agosto de 2016. La Palma, Cundinamarca.

Entrevista con Rocío Rincón, líder de una asociación de mujeres víctimas. 17 de agosto de 2016. La Palma Cundinamarca.